

Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandante contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que acogió parcialmente la demanda, declaró la existencia de la relación laboral, desde el 25 de julio de 2005 al 29 de diciembre de 2023, justificado el despido indirecto, desestimó la demanda de nulidad del despido, pago de cotizaciones previsionales y descanso reparatorio de la Ley N°21.409.

**Segundo:** Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

**Tercero:** Que las materias de derecho propuestas para ser unificadas consisten en determinar la procedencia:

1. *“del pago de cotizaciones de seguridad social durante la relación laboral, cuando esta se haya declarado en la sentencia definitiva;*
2. *de la nulidad del despido, cuando en la sentencia definitiva se haya declarado la relación laboral y;*
3. *de la compensación del descanso reparatorio no gozado, al término del contrato de trabajo”.*



**Cuarto:** Que, con relación al primer tema jurídico planteado para ser uniformado, la demandante ofreció, a modo de contraste, la sentencia dictada por esta Corte en la causa Rol N°11.419-2019, y la dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en la causa Rol N°467-2018. Con relación al segundo, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol N°3864-2021.

Las dos primeras, en síntesis, señalan que debió accederse a la pretensión del trabajador referida al pago de las cotizaciones previsionales durante el período que se mantuvo vigente la relación laboral, pues la sentencia definitiva dictada es declarativa, sólo constata una situación preexistente. En consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte de la empleadora. De manera que, si las cotizaciones de seguridad social no fueron pagadas de conformidad con las remuneraciones que correspondían, debió accederse a su pago, por lo que se incurrió en la infracción de los artículos 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500.

La tercera, por su parte, argumenta que es un hecho no discutido que el demandante es tecnólogo médico, que se desempeñaba en el Centro de Medicina Nuclear Positronmed y que sus labores consistían en la preparación de pacientes para exámenes diagnósticos de gammacamara y tratamientos con radioisótopos. Por consiguiente, examinados los términos de la Ley N°21.530, consideró, que el actor cumple los requisitos legales para acceder al pago del descanso compensatorio, ya que se desempeñó en un centro de salud, en una jornada superior a la contemplada en la ley, sin que se pueda estimársele comprendido en la excepción del artículo 4 del referido texto legal

**Quinto:** Que, por su parte, la sentencia impugnada rechazó el arbitrio de nulidad, en lo pertinente, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, dado que, primero, lo pretendido por la recurrente a través de la causal de infracción de ley, en cualquiera de las hipótesis que plantea, y conforme a las que solicita que se condene a la demandada al pago íntegro de las cotizaciones previsionales por todo el período demandado, esto es, julio de 2005 a diciembre de 2023, conforme a la petición concreta de su recurso y a los fundamentos del mismo, no es que se efectúe un cuestionamiento al juzgamiento jurídico en que se sustenta el fallo impugnado en cuanto a la elección de la norma aplicable a los hechos asentados en el proceso, sino que una nueva valoración de los elementos



de convicción para obtener la modificación de los hechos acreditados y, conforme a ello, establecer que la demanda debe ser acogida en aquella parte que solicita el pago de las cotizaciones actora por todo el período que señala. Estos aspectos son ajenos a la causal de ineficacia.

Agregó, que sólo se dará lugar al cobro de las cotizaciones de seguridad social, en la forma que sigue:

Respecto de las cotizaciones en AFP Habitat S.A., aparece que la actora se encargó de pagar sus cotizaciones desde el mes de marzo de 2014, por lo que se condenará a pagar al demandado las del periodo anterior, es decir, de julio de 2005 a febrero de 2014, puesto que existe una cláusula contractual al efecto y no hay un daño previsional que pueda ser imputado a la demandada. Las cotizaciones de salud, señaló, seguirán el mismo criterio.

Respecto de las cotizaciones de cesantía en AFC Chile III S.A., sostuvo, se condenará al demandado a pagar las cotizaciones por el período que ve desde julio de 2005 a diciembre de 2023, pero limitadas al porcentaje que es de cargo del empleador, es decir, al 2,4%, según el artículo 5 de la Ley N°19.728, y no el que corresponde solventar al trabajador con su patrimonio, porque, con ello, se configuraría un pago doble.

Añadió que, con relación a la infracción denunciada de los artículos 2 y 3 de la Ley N°21.409, resulta ineludible reconocer que se estableció en el proceso que la demandante *“trabajó como coordinadora del Programa Habilidades para la Vida en vinculación con los establecimientos educativos de la comuna de Penco por más de 18 años, además de ejecutar otras labores propias de la administración municipal de la salud”*, es decir, en actividades administrativas ajenas al universo de beneficiarios y a los requisitos generales para acceder al descanso reparatorio para el personal de la salud, que indica el artículo 2 de la Ley N°21.409, en reconocimiento a la labor desempeñada durante la pandemia por COVID-19; lo que se corrobora con el establecimiento fidedigno de la historia de esta ley, pues la moción parlamentaria en torno a ella se fundó, en lo pertinente: *“en una importante carga laboral y estrés de los trabajadores de la salud, en establecimientos públicos y privados, además de la inevitable puesta en riesgo al contagio, de todos quienes conforman la estructura de atención, producto de su exposición al coronavirus a raíz del tratamiento prodigado a los pacientes”* (Primer Trámite Constitucional, Cámara de Diputados).



**Sexto:** Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

**Séptimo:** Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito con relación a primera y tercera materia para unificación esgrimidas por la demandante, tal exigencia no aparece observada, desde que, en lo relativo a la primera, esta causa se refiere a la existencia de una cláusula en los contratos de la demandante que la hacen responsable del entero de sus cotizaciones previsionales y de salud, por el periodo que va desde marzo del año 2014 a diciembre de 2023, mientras que en las sentencias de contraste se sustentan en antecedentes fácticos diversos, sin que se haga referencia a la existencia de alguna cláusula contractual semejante ni tampoco a pagos realizados por los trabajadores de sus cotizaciones de seguridad social.

Con relación a la segunda, porque la sentencia de contraste se afina en que el actor se desempeñaba en un centro de salud, como trabajador de la salud, lo que no ocurre en estos autos, en que la demandante desarrollaba tareas en actividades administrativas en establecimientos de educación o en la administración municipal.

**Octavo:** Que, así, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la demandante, en la primera y tercera materia, puesto que la necesidad de uniformar las materias propuestas y la disparidad de decisiones respecto de las mismas, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

**Noveno:** Que, en lo relativo a la segunda materia a unificar, la sentencia impugnada rechazó el arbitrio de nulidad, fundado, en lo pertinente, en la causal



del artículo 477 del Código del Trabajo, dado que compartió lo decidido por la Excmá. Corte Suprema, en sede de unificación de jurisprudencia en la materia, según lo resuelto en las causas Roles N°20.08-2022 y N°98.552-2022, que concluyeron que no se aplica la sanción de nulidad del despido, tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado.

**Décimo:** Que, para justificar la existencia de distintas interpretaciones respecto de la materia que se pide unificar, alega que lo fallado en la sentencia que se impugna, resulta contradictorio con lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la sentencia dictada en la causa Rol N°126-2023, que, en síntesis, sostuvo que, al reconocer una relación laboral, corresponde resolver una de las consecuencias de no haberse pagado las cotizaciones previsionales por el municipio, circunstancia en la que se debe acceder a las consecuencias que el artículo 162 del Código del Trabajo prevé para tal falta.

**Undécimo:** Que las sentencias reseñadas en el considerando precedente dan cuenta que, en algún momento existieron distintas interpretaciones respecto de la materia, la que se encuentra unificada por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en la causa Rol N°40.253-2017, reafirmandose tal criterio sin variación más recientemente en las Roles N°4960-2024 y N°248.275-2023, sosteniéndose que no corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido a los órganos de la administración, porque en estos casos se trata de contratos a honorarios que al menos en su origen, fueron acordados al amparo de un estatuto que les otorgaba una presunción de legalidad y la sanción pretendida se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado carecen de la capacidad de convalidar libremente el despido, por requerir un dictamen condenatorio previo, particularidad que los grave en forma desigual, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional y desproporcionada.

**Duodécimo:** Que, de esta manera, no aparece que este segundo tema cuya línea jurisprudencial se procura unificar requiera de la aplicación del mecanismo unificador que importa el arbitrio intentado, por lo que se debe decretar su inadmisibilidad, puesto que la necesidad de uniformarla y la disparidad de decisiones respecto de la misma que se propone como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente.



Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.

Se previene que la ministra señora **Chevesich**, si bien tiene una postura diferente sobre la primera materia de derecho cuya unificación se solicita por el demandante, consistente en la aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, en los términos señalados en los votos estampados en sentencias dictadas en causas que se refieren a la misma cuestión, declina incorporarla, teniendo únicamente en consideración que ya se encuentra uniformada por esta Corte en los términos señalados en la presente sentencia, sin que se hayan dado a conocer nuevos argumentos que autoricen su variación, y que tampoco ha sido modificada.

Regístrese y devuélvase.

N°13.612-25.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Jessica González T., ministra suplente señora Dobra Lusic N., y las abogadas integrantes señoras Fabiola Lathrop G., y María Angélica Benavides C. Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.



En Santiago, a veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

